

páginas

Una revista de **FLIP** FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA

PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Guardianes del territorio

¿CÓMO SE HACE PERIODISMO EN LOS DEPARTAMENTOS EN CONFLICTO?
¿QUIÉNES PRODUCEN INFORMACIÓN LOCAL Y QUÉ PASA EN SUS COMUNIDADES CUANDO SON ASESINADOS?

Pág. 08, 12 y 32

La violencia contra la prensa no cambió

MÁS DE DOSCIENTAS AMENAZAS Y DOS ASESINATOS A PERIODISTAS.
¿QUIÉNES QUIEREN SILENCIAR A LA PRENSA?
¿QUÉ REGIONES ESTÁN EN MAYOR RIESGO?

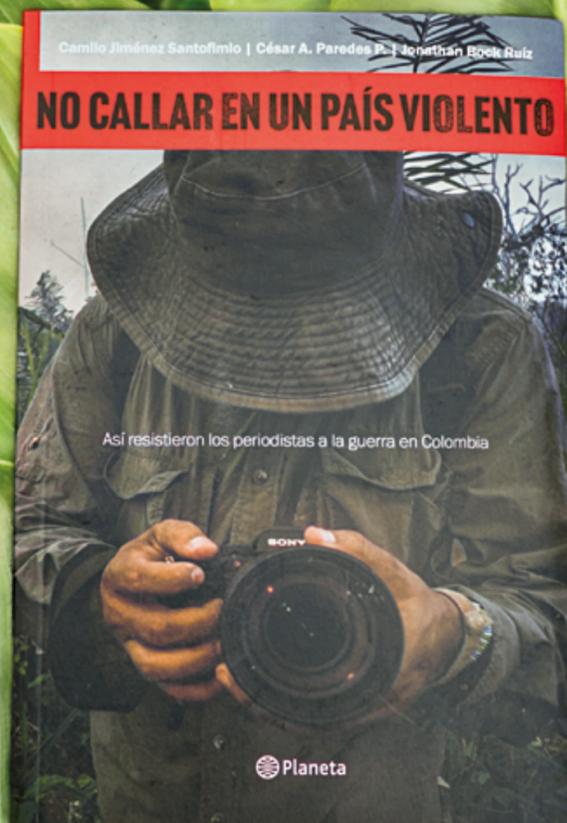
Pág. 26

Conversaciones

SILVIO WAISBORD, ACADÉMICO, Y FRANKLIN CASTAÑEDA, DEL MINISTERIO DE INTERIOR, REFLEXIONAN SOBRE LOS COMPROMISOS NECESARIOS PARA PROTEGER A LA PRENSA.

Pág. 36 y 38





No callar en un país violento reúne las voces de 38 periodistas que hablan sobre cómo el periodismo ha contado la verdad por encima del miedo.

DISPONIBLE EN LAS LIBRERÍAS DEL PAÍS.



FOTO: Juan Pablo Madrid-Malo.

Necoclí, Antioquia. 2022.

Periodistas en el Urabá Antioqueño superan los obstáculos y adversidades que imponen el auge de la violencia y la vigilancia de actores armados, para informar lo que acontece en sus territorios.



FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA (FLIP), 2023
www.flip.org.co

©Licencia Creative Commons



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

páginas

PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



QUINTA EDICIÓN
Febrero 2023
Bogotá D.C.

EN PORTADA:
Angie Pik
[@angie_pik_illustrator](#)

CONCEPTUALIZACIÓN Jonathan Bock Ruiz
Andrea Torres Perdomo
César Paredes
Daniel Chaparro Díaz
Laura Merchán Calderón

TEXTOS Andrea Torres Perdomo
Ángela María Agudelo Urrego
Carolina Arteta Caballero
César Paredes
Daniel Chaparro Díaz
Jonathan Bock Ruiz
Juan Pablo Madrid-Malo
Raissa Carrillo Villamizar
Viviana Yanguma Ayala

REDACTORA DE "A LOS PERIODISTAS
NOS MATAN VARIAS VECES"

Laura Ardila

COLUMNISTA INVITADA Laura Bonilla

EDICIÓN Jonathan Bock Ruiz
Andrea Torres Perdomo

CORRECCIÓN DE ESTILO Ángela María Agudelo Urrego
Laura Alejandra López Pineda

GESTIÓN DE FOTOGRAFÍA Sebastián Castañeda

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y APOYO GRÁFICO Laura Merchán Calderón
Luisa Burgos Marín

IMPRESIÓN Espacio Creativo Impresores S.A.S.

El guardián desnudo



¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS GUARDIANES DE LOS TERRITORIOS? Se trata de periodistas ciudadanos, cuyas figuras emergen especialmente en aquellos municipios, pueblos y veredas donde prácticamente no existen empresas de comunicación. Son mujeres y hombres que informan, que proporcionan noticias. No tienen un guión y la mayoría han aprendido su oficio de manera empírica. En ocasiones, los métodos que emplean son opuestos a los códigos que durante décadas formaron el quehacer periodístico. Su trabajo es cuestionado por figuras públicas quienes les tildan de activistas, militantes e incluso opositores, buscando agredir a esas voces que vigilan y controvierten al poder local.

En este perfil encajaban Rafael Moreno, quien hacía periodismo en el sur de Córdoba, y Wilder Córdoba, que trabajaba en La Unión, Nariño, los dos reporteros que fueron asesinados en el 2022. Esos rasgos también se ajustan a decenas de periodistas que fueron amenazados, desplazados, censurados.

Es necesario responder a estas tres preguntas para poder entender mejor la radiografía de la violencia que, como en décadas pasadas, vuelve a enfilarse contra la prensa en todo el país. Hacer ese repaso por quiénes son, por qué los amenazan y cuáles son las consecuencias de esos ataques, también supone anticipar que esta situación podría empeorar.

Las elecciones locales y la política de la Paz Total del Gobierno actual supondrán que estos guardianes serán blanco de ataques. Ese desafío es un llamado urgente para que los diferentes sectores del Gobierno y del Estado comprendan que el paquete de violencia contra periodistas es amplio. Que incluye los mensajes que se publican en redes sociales y por supuesto también la activación de las pistolas. Sin comprender esas otras formas de violencia no será posible avanzar en materia de prevención y será imposible proteger a quienes le siguen apostando a ser los guardianes del territorio y evitar que sean amenazados, desplazados o asesinados.

¿CÓMO PROTEGER A LA PRENSA EN UN PAÍS VIOLENTO? Desde el 2020, cada año se impone un nuevo récord de amenazas contra periodistas. La cifra del 2022 fue de 218, la más alta de los últimos quince años. Además, dos periodistas fueron asesinados, para un total de cinco en los últimos tres años. Con estas violencias ocurren múltiples heridas que fracturan la confianza de la gente, que instalan el miedo en los poros de la comunidad y que van trazando un país con puntos ciegos y verdades ahogadas.

Estos ataques frustran la posibilidad de compartir información, de hacer seguimiento a los problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades, esas que con frecuencia ocurren en las zonas más conflictivas del país. Ahí, quienes hacen periodismo son blanco de grupos criminales, ya sea porque el Estado no les protege o porque es cómplice.

¿CÓMO PEDIRLE A LOS GOBIERNOS Y A LAS FIGURAS POLÍTICAS QUE PROTEJAN AL PERIODISMO CUÁNDO SON ELLOS QUIENES ESTIGMATIZAN Y DESACREDITAN?

Entre abril y julio del año pasado, la campaña electoral para elegir presidente se convirtió en otro campo de batalla. La discusión política transcurrió en medio de altísimos niveles de violencia y se caracterizó por constantes y hostiles mensajes contra la prensa.

Por Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.
ILUSTRACIÓN: Angie Pik.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: Juan Esteban Lewin · DIRECTOR EJECUTIVO: Jonathan Bock Ruiz
SUBDIRECTOR PROGRAMÁTICO: César Paredes · ASESOR DE DIRECCIÓN: Daniel Chaparro Díaz
ASESOR DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Sebastián Salamanca Calle · ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mireya Luque Triana
Ángela Marcela Gómez · Diana Herrera Rodríguez · Diana Carolina Pinto · María Camila Marín · María de los Ángeles Tous
Nichol Espinel · Nubia Cárdenas · ÁREA DE PROYECTOS: Diana Santos Cubides · Esteban Moreno
CENTRO DE ESTUDIOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Juan Pablo Madrid-Malo · Esteban Sánchez Molina · Génesis Tobón · José Alberto Cubillos
CONSONANTE: Carolina Arteta Caballero · Alejandra Duque Rivera · Angy Alvarado · Beatriz Valdés Correa
Camila Bolívar Manzano · Isabela Porras Alzate · María Fernanda Padilla · María Paula Sierra · Natalia Prieto Caballero
COORDINACIÓN LEGAL: Raissa Carrillo Villamizar · Ángela Caro Montenegro · Daniela Rojas · María José González · Viviana Basto Vergara
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN: Viviana Yanguma Ayala · Daniela Ospina Noriega · Laura Jaimes Enciso
EQUIPO CREATIVO Y DE COMUNICACIONES: Andrea Torres Perdomo · Ángela María Agudelo Urrego
Cristian Mora Jiménez · Laura López Pineda · Laura Merchán Calderón · Sebastián Castañeda

SIGRID RAUSING TRUST

Luminate



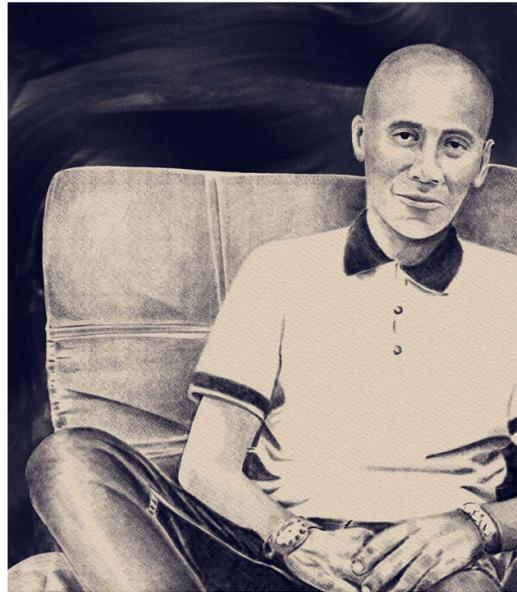
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS



VERSIÓN DIGITAL

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Sigrid, Luminate, el Fondo Noruego para los Derechos Humanos (FNDH) y Open Society Foundations. Los contenidos de este material son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de estas organizaciones.

18



40



12



32



08

38

Contenido

06 / El periodismo que sostiene al país

Guardianes del territorio: la voz de la comunidad bajo amenaza | *pág. 08*

Hacer periodismo en medio de una guerra: Cauca, Nariño y Putumayo | *pág. 12*

Rafael Moreno: apagaron la voz de la verdad | *pág. 16*

Wilder Córdoba: cuando silenciaron a la única voz de La Unión | *pág. 18*

20 / Los intentos por acallar al periodismo

Incremento de la violencia contra la prensa: la tendencia de los últimos tres años | *pág. 22*

2022: la violencia contra la prensa no cambió | *pág. 26*

30 / Después de la censura

A los periodistas nos matan varias veces | *pág. 32*

"La vigilancia es censura y es una forma de violencia contra la prensa" | *pág. 36*

"Nuestra intención es trazar una política pública que garantice la labor de la prensa en Colombia" | *pág. 38*

OPINIÓN | Profesión: periodista (peligro) | *pág. 40*



El periodismo que sostiene al país

Periodistas locales, con pocos recursos y liderazgo social en sus comunidades, son objetivo de los violentos y censuradores.

Rafael en Córdoba y Wilder en Nariño se suman a la lista de periodistas asesinados por razón de su oficio en Colombia. ¿Hay patrones detrás de esa violencia? ¿Qué regiones deberían preocuparnos más?

Guardianes del territorio: *la voz de la comunidad bajo amenaza*

Cada vez son más las y los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección, uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Por César Paredes, FLIP.

No tienen una sala de redacción ni grandes equipos de producción. Combinan fórmulas del periodismo tradicional con nuevas maneras de contar lo que pasa en su localidad. No tienen un guion, pues con el tiempo han aprendido empíricamente qué es lo que funciona para que la comunicación sea efectiva. En la calle son conocidos por sus vecinos y seguidores. Su punto de vista es del testigo directo de los acontecimientos. Aunque algunos han recibido formación académica o técnica, en la práctica cuestionan la dogmática de la objetividad en el oficio. Hay quienes consideran su trabajo un servicio social, otros, un activismo o, incluso, una militancia. Su ventaja es la proximidad a la noticia. Su audacia, emprender un proyecto, la mayor de las veces unipersonal, para suplir la falta de información en un país en el que la tercera parte de los municipios no cuentan con medios locales. Su desventaja es el fruto de esa condición, ya que la misma notoriedad que los lleva a convertirse en las únicas voces que vigilan y controverten al poder local, los puede poner en riesgo, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Se trata de un nuevo tipo de periodista que, al alero de la transformación de la industria del periodismo, ejerce el liderazgo social en su territorio.

En los últimos tres años en Colombia han sido asesinados, en razón de su oficio, cinco periodistas, de los cuales cuatro eran independientes y cumplían con este perfil: Abelardo Liz, en Corinto, Cauca; Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca; Rafael Emiro Moreno, en Montelíbano, Córdoba; y Wilder Alfredo Córdoba, en La Unión, Nariño.

Su desaparición ha supuesto una herida para las comunidades que admiraban su valentía al denunciar la corrupción o al visibilizar el trabajo comunitario; su silenciamiento, un golpe brutal al maltrecho ecosistema mediático de las regiones en donde a veces ni siquiera hay medios de comunicación local. Estas muertes coincidieron con la oleada de asesinatos de líderes sociales que, según Indepaz, entre 2020 y 2022 ascendieron a 670 a lo largo y ancho del país, así como con el aumento sostenido de las amenazas contra las y los periodistas que pasó de 152 en 2020 a 218 en el último año; la cifra más alta que la FLIP haya registrado.

Las muertes de estos periodistas regionales son el cierre de una espiral del riesgo que enfrentan cuando ejercen el liderazgo social y que empieza con la estigmatización en las redes sociales con expresiones como “no sea sapo” o comentarios que buscan deslegitimar su trabajo como “sicario de micrófono” o “chismoso”; solicitudes anónimas de no meterse con los políticos locales y no informar sobre algún tema. El riesgo se escala con el desprecio público de funcionarios que se atreven a cuestionar su trabajo periodístico, con la intimidación



Periodistas asumen un rol trascendental en medio de carencias sociales y promesas estatales incumplidas.



FOTO: Consonante.org

de desconocidos contra su familia a través de redes sociales o, incluso, con mensajes de texto directos en sus comunicaciones. Esta espiral puede llegar a la amenaza con panfletos o sicarios que transmiten el mensaje de la muerte. El asesinato de un o una periodista en estas comunidades profundiza la violencia contra la ciudadanía vulnerable, representada en una o un ciudadano de a pie que solo cuenta con su voz y una audiencia que ha quedado sola.

Vale preguntarse ¿por qué estos periodistas que tienen liderazgos sociales están tan expuestos? ¿Cuál es el papel que cumplen en una democracia? ¿Por qué su desaparición compromete a toda la sociedad?

“Los periodistas que ejercemos un liderazgo social hemos sido el resultado de una necesidad”, anota Diana Jembuel, periodista de la emisora *Namui Wam*, (“Nuestra Palabra” en español), y quien pertenece al pueblo misak, ubicado en el suroriente del departamento del Cauca. Para ella, la información que provenía de los medios de comunicación ajenos a su territorio no era precisa ni suficiente, lo que la motivó a estudiar comunicaciones y a dedicarse a la transmisión de contenidos en su propia lengua. “Yo creo que dentro de los territorios tiene que haber alguien que conozca la histo-

ria, conozca el espacio y además interactúe con el resto de la comunidad, para que resalte la realidad de lo que pasa”, agrega. Su trabajo periodístico, además de conectar interculturalmente a su comunidad, ha sido destacado por dar a conocer el papel de la mujer en el pueblo misak.

Laura Giraldo, una socióloga de la Universidad de Antioquia que aprendió el oficio en los talleres del proyecto Consonante de la FLIP, secunda esta opinión: “aquí en El Carmen de Atrato [en Chocó] no llegan los medios grandes. Para poner un ejemplo: hay una sola corresponsal de *Caracol* para todo el departamento y pues no puede darle una mayor visibilidad a las historias del municipio”. Para ella, la combinación de periodismo y liderazgo social es fundamental para poner el foco en los temas ambientales de su municipio.

Como ellas, otros periodistas han encontrado en sus localidades un acervo de historias que han potenciado su capacidad de influencia. Ese es el caso de Éder Narváez en Caucasia, Antioquia, director del portal *NP Noticias Online* y corresponsal de *Teleantioquia*. En diciembre del 2021, cuando se preparaban las corralejas de su municipio, Narváez comenzó a publicar noticias sobre el maltrato animal con un seguimiento detallado de los caballos heridos, los toros asesinados y las personas afectadas. Pero no solo eso, con

Nuevos periodismos crecen en comunidades con enemigos a su acecho.

documentación en mano se fue a visitar a las autoridades del departamento. “Teniendo en cuenta mi capacidad de buscar información, de buscar datos, de contrarrestar, me di a la tarea de visibilizar ese problema. Yo dije: a los defensores de derechos animales los intimidan, pero si lo hago yo puedo generar reflexión y hacer cuestionamientos con argumentos, a mí posiblemente me van a escuchar más”, dice.

Así fue. Narváez se convirtió en un defensor de los animales. El eco de sus denuncias obligó a las autoridades a crear protocolos para la celebración de las fiestas. Pero también vinieron las amenazas. Hoy Narváez tiene un esquema de seguridad con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y está a la espera de más protección, pues los peligros no han parado en una región en la que el liderazgo social incrementa los riesgos en la seguridad.

Para Germán Rey, profesor e investigador de comunicación de la Universidad Javeriana, la emergencia de este tipo de periodistas tiene que ver con los cambios en la forma de percibir el valor social, la elaboración y circulación de la información. Con los cambios tecnológicos y sociales se ha incrementado un periodismo que desafía la frontera del oficio con el activismo. “Este incremento tiene aspectos favorables, pero también riesgos y problemas”, dice. En su trabajo de investigación ha podido constatar que entre las ventajas de este periodismo están “una mayor visibilidad de sus propósitos, un diálogo con otros campos de movilización social y una agenda de temas concretos que interesan a la comunidad”.

En efecto, en los medios alternativos y redes sociales no solo han fortalecido la agenda comunitaria de las mujeres y de los pueblos indígenas contada en su propia lengua, como en el caso de Jembuel o las demandas ambientalistas específicas de una comunidad, como en el caso de Giraldo o el llamado animalista que hace Narváez en una región con una cultura ganadera. El trabajo periodístico local también



FOTO: FLIP



FOTO: Gabriel Linares



FOTO: Consonante.org



FOTO: Consonante.org

ha impulsado liderazgos campesinos, de la población LGTBI, o de quienes reclaman mejores servicios públicos o sanitarios, entre muchas posibilidades.

Según Rey, quien fue relator del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra periodistas (2015) y coordinador de una investigación sobre medios nativos digitales en América Latina (2022), una persona con la misión de informar sobre algún aspecto de la comunidad casi de inmediato se convierte en líder. Sin embargo, este periodismo enfrenta problemas como: “una adscripción militante que puede disminuir su capacidad crítica, unos compromisos que confunden su sentido y papel en la sociedad, y un énfasis político que desvanece la libertad del periodismo”.

Desde otra orilla, hay quienes consideran que su papel en el periodismo contrarresta narrativas dominantes que han contribuido a la estigmatización de sectores vulnerados. Para Mauricio Reyes, periodista de *Trochando sin fronteras*, un proyecto de comunicación transmedia que cubre las demandas de organizaciones sociales campesinas de Arauca, el periodismo de su medio es militante y no puede adscribirse a la objetividad pregonda por las escuelas de periodismo. “Es militante en el entendido de que las organizaciones de las que hacemos parte tenemos un concepto de mundo y un plan de vida”, afirma.

Reyes, quien es ingeniero de sistemas e hizo una maestría en periodismo de datos, lo ilustra con un ejemplo: “durante varios años la matriz mediática impulsada por el Estado era que Arauca

estaba lleno de coca y traficaba hacia Venezuela. Pero nosotros hicimos una investigación con datos sobre la erradicación, las incautaciones, destrucción de laboratorios y la lucha de la gente por cambiar los cultivos sin la ayuda del Estado, demostramos que no era cierto y contrastamos esa estigmatización”.

Otra de las razones clave para entender la emergencia de este tipo de periodismo y liderazgos es la financiación. Según las y los periodistas consultados para esta revista, quienes pertenecen a colectivos se sostienen gracias a la gestión de sus líderes que buscan recursos con la cooperación de oenegés o en concursos del Estado. En cambio, para las y los periodistas que tienen su propio medio la tarea es más difícil. Ellas y ellos refieren que la actividad informativa no puede sostenerse sin la ayuda de la pauta de emprendedores, la política local o el apoyo en otras actividades económicas. “Yo me he dedicado a hacer notas sobre la entrega de regalos, a hacer cubrimientos con fotografías sobre algunos temas por los que pagan, si no, no llego a fin de mes”, dice Yamir Jhan Pico, director del portal *Caribe Noticias 24/7* del sur de Córdoba.

De ahí que el liderazgo sea una llave que abre puertas en el mundo de la representación social y que da otras ventajas, ya sea para emprender nuevos proyectos o para participar en política. Sin embargo, con esa visibilidad

también aumentan los riesgos. Los dos periodistas asesinados el año pasado Rafael Moreno (37 años, Montelíbano), fundador de *Voces de Córdoba*, y Wilder Alfredo Córdoba (44 años, La Unión), periodista de *Unión Televisión*, no se limitaban a comunicar. El primero aspiró a una de las curules especiales de la circunscripción por la paz; el segundo, además de denunciar la corrupción y la falta de atención de las autoridades locales a los problemas de su comunidad, también convocaba jornadas para tapar huecos de las calles de su municipio. “Los riesgos se aumentan —advierte Reyes— cuando a la función periodística se suman los liderazgos sociales y políticos, entre otros motivos porque se agregan otros conflictos, otros intereses y actores, que en algunos contextos se tornan muy peligrosos y difíciles de manejar”.

La manera de enfrentar los riesgos también cambia de acuerdo a los contextos y el apoyo que estos periodistas líderes puedan tener. Jembuel, por ejemplo, se siente rodeada por una comunidad que valora y demanda su trabajo. “Hasta ahora no he recibido amenazas o presiones, pues estamos en el territorio y tenemos el respaldo de nuestras autoridades”, dice. No obstante, reconoce que hay temas que entrañan un peligro latente y requieren de cuidado para su cubrimiento, por ejemplo, lo que las comunidades indígenas del Cauca llaman la recuperación de tierras mediante la ocupación de predios.

LA MISMA NOTORIEDAD QUE LOS LLEVA A CONVERTIRSE EN LAS ÚNICAS VOCES QUE VIGILAN Y CONTROVIERTEN AL PODER LOCAL, LOS PUEDE PONER EN RIESGO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS MÁS CONFLICTIVAS DEL PAÍS. SE TRATA DE UN NUEVO TIPO DE PERIODISTA QUE EJERCE EL LIDERAZGO SOCIAL EN SU TERRITORIO.

En otra esquina del país, Giraldo considera que se trata de un dilema: hacer periodismo con mayor protagonismo o mantenerse al margen, a pesar de que muchas de las noticias en El Carmen de Atrato tienen que ver con su activismo. “Si por ejemplo hiciera más opinión, que a mí me gusta, entraríamos en las disputas más de tipo político y eso me pondría en riesgo. A veces pienso ‘eso hay que decirlo’, pero no me atrevo porque este es un municipio en el que hay de todos los actores armados y un tema conflictivo que es la presencia de una multinacional minera”.

Por su parte, Jhan Pico, en el sur de Córdoba, quien en el 2018 fue víctima de un atentado en el que sicarios con moto pasaron frente a su casa disparando, siente un miedo constante. Él ha considerado cambiar el enfoque investigativo de su trabajo por uno que le represente menos riesgos en el territorio. No le falta razón, pues Jhan Pico, primo de Rafael Moreno, era uno de los cuatro periodistas de la región que eventualmente se juntaban para hacer investigaciones compartidas. “Yo vivo con terror —dice—, porque la gente que me quiere, ocho de cada diez me saludan, pero también me advierten, ‘¡cuídese!’... Yo no he vuelto a ver una nota de denuncia contra la corrupción, nadie se atreve a publicar sobre los políticos, vivimos censurados. Rafa era valiente, pero también creo que el periodismo de mártires no va”.

Y es que la pérdida de un periodista que ejerce el liderazgo en el territorio es irreparable. Su desaparición frustra “la posibilidad de compartir información,

construir vida pública, hacer seguimiento a problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades —dice Rey—. La violencia contra los periodistas no es solo una violencia individual, sino sobre todo una vulneración muy grave de la vida de una comunidad”. El vacío que dejan resquebraja cualquier asomo de tejido social y en su lugar se afianza el poder de facto de los corruptos y los violentos.

Los cambios en el panorama mediático demandan una apertura de miras de la sociedad para desestigmatizar este tipo de periodismo. El gobierno actual, en su compromiso con defender la vida e integridad de las y los líderes sociales, tiene el reto de desarrollar una estrategia que proteja a las y los periodistas con este perfil. No solo que brinde garantías para su seguridad —que es lo mínimo—, sino que fortalezca los medios de comunicación nacientes en escenarios que resienten los vacíos de información. Reconocer el trabajo de estos guardianes de sus territorios y valorar el aporte que hacen a una comunidad es un factor clave para el fortalecimiento de las democracias locales, pues estos periodistas regionales en la mayoría de municipios del país suplen las necesidades de información que los grandes medios de comunicación no proporcionan. Su voz no representa una alternativa entre otras, sino que muchas veces es la única vigilante de una comunidad. ♦

Hacer periodismo en medio de una guerra: Cauca, Nariño y Putumayo



Por Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez, FLIP. INTERVENCIÓN MAPAS: Sebastián Castañeda.

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo [expone Indepaz](#) en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de seiscientos municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios.

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al

silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa.

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

CAUCA

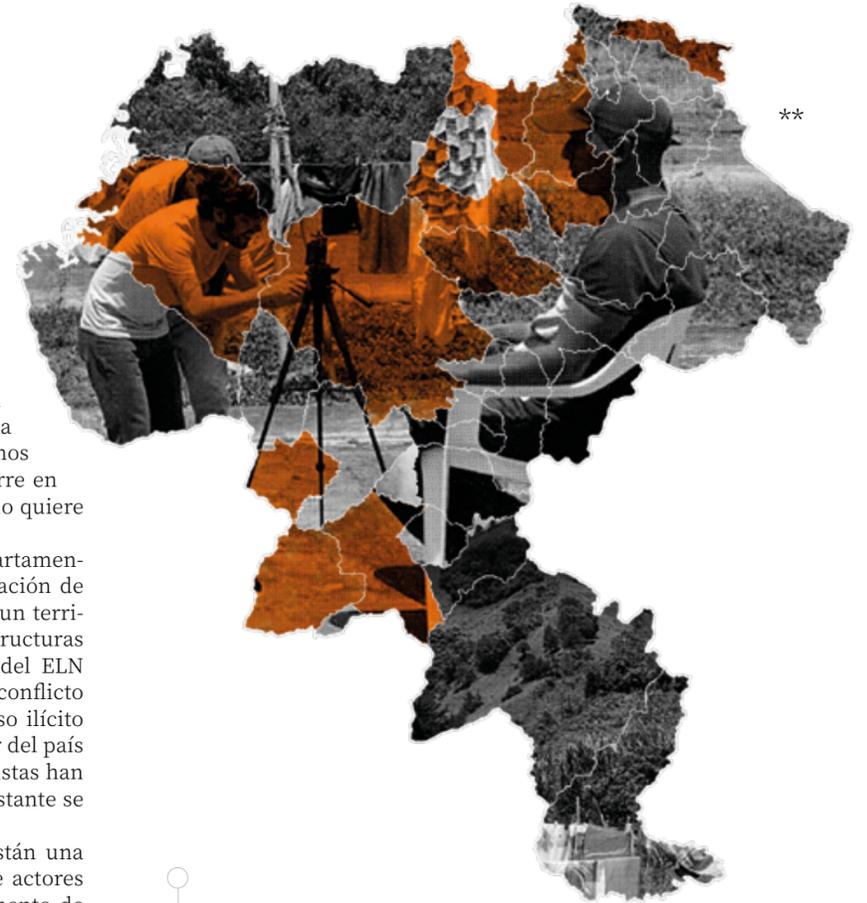
“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una radio comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico, las y los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín*, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de Policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital, Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”.

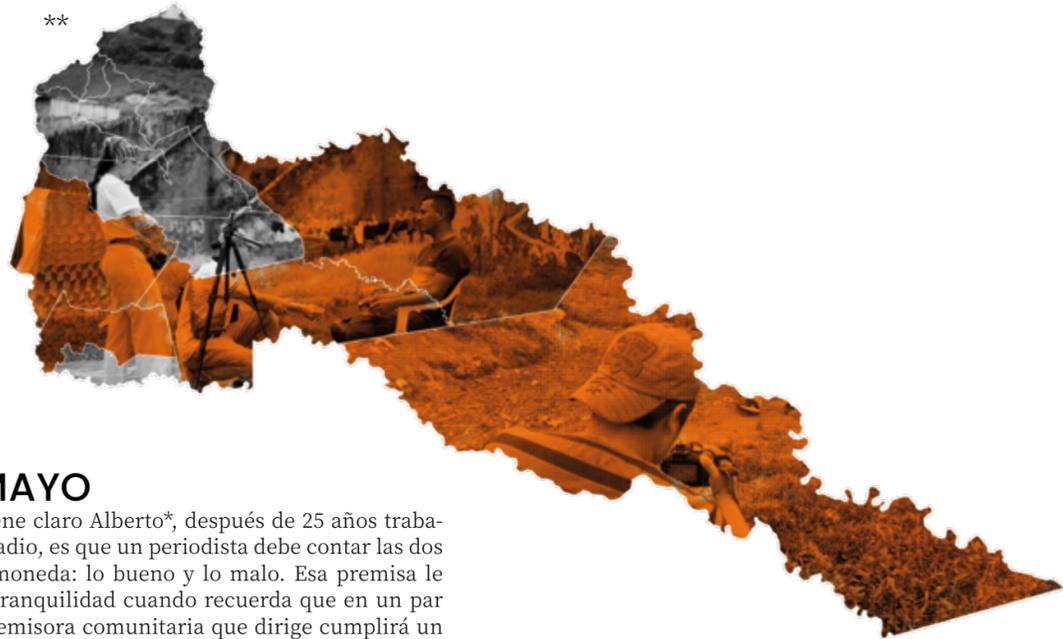


- **Grupos armados presentes:** El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.
- **Asesinatos de líderes sociales en el 2022:** 24
- **Masacres en el 2022:** 15
- **Asesinatos de firmantes de paz en el 2022:** 7
- **Hectáreas de coca:** entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera.
- **Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022:** 19 dirigidas a 21 periodistas.

Fuentes:

- Informe 2021 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
- Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022 (1) de Indepaz.
- Cifras asesinatos a líderes sociales, firmantes de paz y masacres: Indepaz.

**



PUTUMAYO

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas.

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a costas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer... ¿Para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la Alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta.

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico... de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron “periodistas mediocres”. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.

- **Grupos armados presentes:** El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO).

- **Hectáreas de coca:** 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país.

- **Asesinatos de líderes sociales en el 2022:** 17

- **Masacres en el 2022:** 7

- **Asesinatos de firmantes de paz en el 2022:** 5

- **Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022:** 3 dirigidas a 8 periodistas.

NARIÑO

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército.

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportaría en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte

hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó (sic)”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto.

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: “es una amenaza indirecta”. ❖

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad.

** Las zonas resaltadas en los mapas corresponden a los lugares en donde hubo masacres en el 2022.



- **Grupos armados presentes:** El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

- **Asesinatos de líderes sociales en el 2022:** 22

- **Masacres en el 2022:** 4

- **Asesinatos de firmantes de paz en el 2022:** 2

- **Hectáreas de coca:** 56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021.

- **Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022:** 8 dirigidas a 8 periodistas.

Fuentes:

– Informe 2021 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

– Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022 (I) de Indepaz.

– Cifras asesinatos a líderes sociales, firmantes de paz y masacres: Indepaz.

Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones relacionadas a su trabajo periodístico. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso revela los riesgos de ejercer el periodismo en algunas regiones y las escasas medidas para garantizar su protección.



— ILLUSTRACIÓN: Rowena Neme

Rafael Moreno:

APAGARON LA VOZ DE LA VERDAD

Por Daniel Chaparro Díaz, FLIP.

“Que hacer periodismo no nos cueste la vida”, repitieron en coro algunas y algunos periodistas del sur de Córdoba, y otros del

Bajo Cauca antioqueño, en un homenaje a la memoria de su colega Rafael Moreno, el 26 de octubre de 2022, diez días luego de su asesinato. Hoy, casi cuatro meses después del homicidio, se desconocen los avances en la investigación por parte de la Fiscalía y no se aclaran las responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el único caso de un periodista asesinado que contaba con un esquema de protección de esa entidad.

Las consignas que acompañaban el pequeño salón en Montelíbano, Córdoba, recordaban otras no muy lejanas en el tiempo, con las que se suele denunciar el asesinato de periodistas y expresar el temor de quienes continúan en el oficio. En Colombia hemos visto esa misma imagen, con tonalidades diferentes, al menos 164 veces. La violencia letal contra la prensa se ha ramificado y ha alcanzado a reporteros y reporteras en distintos rincones del país, dejando un vacío de información en aquellos lugares donde los y las periodistas han optado por desplazarse, abandonar el periodismo o callar, cansados de demandar garantías de protección para sus vidas. El silencio, como lo saben quienes permanecen en las zonas más violentas, no es una opción sino la única posibilidad para sobrevivir.

Rafael Moreno, que creció en Puerto Libertador y recorrió los municipios del sur de Córdoba, también lo sabía. Sin embargo, en 2018 creó *Voces de Córdoba*, un medio digital en Facebook con cincuenta mil seguidores, del que era director y periodista.

UN REPORTERO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Rafael era el más entusiasta de un pequeño grupo de periodistas que investigaba la corrupción en el sur de Córdoba, sobre todo en San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano.

Su trabajo consistía en sumergirse en la plataforma de contratación del Estado y hacer reportería en los municipios en los que se evidenciaban retrasos o irregularidades. La disparidad entre los contratos y las obras evidenciaba una corrupción que Rafael exponía en videos y en opiniones en vivo, que aún están disponibles en la página de *Voces de Córdoba*.

Todas ellas se difundieron rápidamente entre los habitantes del departamento, no solo por sus contenidos y las pruebas que las acompañaban, sino por el tono con el que se refería a estas noticias. Por ejemplo, al estadio de fútbol de Puerto Libertador, que prometió ser entregado en un año, Rafael lo llamó “La Eternidad”, porque después de cuatro años no han terminado la obra. Carreteras inconclusas, hacinamiento en cárceles o el uso de canteras ilegales para construcción fueron otras de sus denuncias.

Su estilo periodístico cautivaba a la audiencia y contagiaba a las y los demás periodistas de la zona.

“ÉL SE ESTABA ATREVIENDO Y OTROS SE ESTABAN ANIMANDO”, DIJO YAMIR PICO, PRIMO DE RAFAEL Y PERIODISTA DE LA ZONA.

Las alertas de corrupción y su capacidad para evidenciarla y renombrarla, incomodaron desde un primer momento al poder, que acudió a la violencia para acallar la voz del periodista que les zumbaba en el oído y les revoloteaba en sus cabezas.

AUSENCIA DE GARANTÍAS

Desde febrero de 2019, a poco menos de un año de crear su medio, Rafael empezó a recibir amenazas. En ese momento se trató de un panfleto que los declaraba a él y a su colega y amigo, Organís Cuadrado, como objetivo militar. Luego, entre mayo de 2020 y julio 2022, y según la documentación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hubo

seis intimidaciones más. Ninguna de esas agresiones fue esclarecida, pues no se supo quiénes estaban detrás de ellas, ni los intereses que tenían para querer censurar el trabajo de Rafael. El periodista, pese a las amenazas, el aumento de la violencia en la zona y el retiro de su esquema de protección en septiembre de 2021, siguió denunciando y ejerciendo su oficio.

La última amenaza que recibió la encontró en el baúl de su moto, una mañana, antes de salir a hacer reportería sobre unas obras inconclusas en Montelíbano. Era una nota que empezaba: “parcero usted se cree el puticas porque habla en público y por eso se cree intocable, aquí ninguno lo es”. Un par de líneas más abajo le anunciaban que sabían todas sus rutinas y movimientos. El mensaje culminaba con una sentencia: “... no te vamos a perdonar lo que estás haciendo, así que ya sabe parcero, el resto del proveedor de esta nueve, está listo esperando por ti (sic)”. Junto a la nota había un cartucho de un arma de fuego.

Al momento de su asesinato, el 16 de octubre de 2022, Rafael tenía asignado un esquema de protección de la UNP que constaba de un chaleco, un botón de pánico y un escolta, quien no se encontraba en el local de comidas rápidas donde ocurrió el homicidio, y que colegas, familiares y amigos del periodista dijeron no conocer.

PERIODISMO EN MEDIO DE LA ZOZOBRA

La mayoría de agresiones contra la prensa en Córdoba en 2022 se concentraron en el sur del departamento: diecisiete de los veintidós ataques se hicieron en esa subregión. “No necesitamos flores, queremos garantías”, se leía en una de las carteleras que colgaron en el homenaje a Rafael en Montelíbano, en un auditorio donde, a pesar de ser invitados, la presencia de funcionarios del Estado fue mínima.

La exigencia de garantías es necesaria para el puñado de periodistas que conviven cotidianamente con el miedo a perder la vida y que, después de lo ocurrido con Rafael Moreno, piensan en abandonar el oficio. Mientras las medidas llegan y el Gobierno nacional calla frente al asesinato de Rafael, las y los periodistas de Córdoba han dejado de investigar y hacer denuncias como las que realizaba su colega. ❖

Wilder Córdoba:

CUANDO SILENCIARON A LA ÚNICA VOZ DE LA UNIÓN

Por Ángela María Agudelo Urrego, FLIP. ILUSTRACIÓN: Rowena Neme.



Han pasado dos meses y no se conocen avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del periodista. En el municipio nadie se atreve a continuar con sus denuncias.

Parecía que Wilder Córdoba era inmune al miedo. Cada vez que recibía un mensaje intimidante contra su trabajo, lo respondía con un comentario de seguridad y burla para no preocupar a nadie. Incluso, enfrentaba a ese perfil desconocido y le decía que iba a seguir informando. Hasta que un día le admitió a Flor, su mamá, que sí sentía temor. Ella le sugirió que parara de publicar noticias y denuncias, pero Wilder siempre le respondió con convicción: “alguien debe hacerlo”.

Wilder era periodista y director de *Unión Televisión*, el medio más representativo de La Unión, Nariño, pues las dos emisoras que hay en el municipio, una comunitaria y otra de la Alcaldía, solo informan sobre ciertos asuntos políticos y culturales. Entonces, cuando Wilder decidió contar otros temas de manera independiente, se hizo el periodista más reconocido para algunos y el más incómodo para otros. Habló de la inseguridad, de los barrios marginados y de la corrupción. Además señaló, con nombres y apellidos, a los que nadie criticaba en voz alta.

Lo hizo por más de diez años en su perfil de Facebook y en el noticiero que emitía cada viernes. Pero luego de algunas publicaciones, Wilder recibía mensajes en los que intentaban convencerlo de que se hiciera a un lado: “no trate de opacar al alcalde con esas cosas —le escribieron—. Más bien únase, acá le va mejor. Piénselo”. Ese mensaje de Facebook lo recibió tres días antes de su asesinato.

El 28 de noviembre, cerca de las 4:00 p.m., Wilder transitaba por la vereda El Salado. Iba en su moto hacia la cabecera municipal cuando le dispararon cuatro veces. Wilder murió en plena carretera. Los sicarios no se llevaron su vehículo ni sus pertenencias, por lo que las autoridades descartaron un intento de robo. Inclusive, vecinos del sector contaron que días antes vieron a hombres desconocidos rondando por allí.

UN COMPROMISO SOCIAL

Cada semana, Wilder salía junto a Jhonny Muñoz, su amigo y compañero de noticiero. Ambos realizaban las labores de un gran equipo: usaban la cámara y el micrófono, hacían reportería, entrevistaban, editaban y publicaban sus notas. Wilder era diseñador gráfico, pero su pasión era ayudar al municipio y a los venteños —como se llama a los habitantes de La Unión— porque, como escribió en su perfil, lo hacía “por el amor a este pueblo y a esta gente”.

Y no solo desde el periodismo. Los lunes por las mañanas, Wilder cambiaba el micrófono por la pala y era reconocido como el “Tapahuecos” porque él y otros venteños, con cemento y pala en mano, arreglaron las vías en mal estado. Lo hicieron por su cuenta y fue tal el impacto de la campaña que un par de empresas públicas locales intervinieron otras carreteras deterioradas.

Cuando ejercía el periodismo, era común ver a Wilder en los sectores más alejados del centro municipal, escuchando las denuncias que pasaban desapercibidas. Así ocurrió con [El Ancianato Viejo](#), un barrio que no cuenta con servicios básicos y que fue afectado por deslizamientos de tierras. En su denuncia, Wilder aseguró que el problema se agravó por la indiferencia de la Alcaldía.

Con las noticias de Wilder, los venteños fueron más críticos con la administración municipal y ellos mismos lo buscaban para compartirle información. En ese voz a voz, trabajadores y exempleados de la construcción del parque Mariscal Sucre, una de las obras más ambiciosas de la Alcaldía, le contaron que no les habían pagado. Wilder también descubrió fallas durante la construcción y que la obra —que está bajo un contrato de 6.400 millones de pesos—, estaba retrasada, pues debía entregarse en febrero del 2022 pero aún está inconclusa.

Luego de sus denuncias, Wilder recibió mensajes de perfiles desconocidos o de sujetos identificados como parte de grupos armados. En un chat que conoció la FLIP, el periodista le dijo a un amigo que integrantes del ELN lo presionaron para publicar sus panfletos. Pero el alcalde Fabián Echavarría dijo que Wilder no les informó sobre tales amenazas y que, según él, las redes sociales no son un

canal oficial para denunciar. Sin embargo, su familia sí intentó cuidarlo: “pero no nos dieron tiempo —recuerda Harry Córdoba, hermano mayor de Wilder—. No pensé que fueran a actuar tan rápido”.

INCERTIDUMBRE TOTAL

Con nostalgia, la familia de Wilder recuerda sus otras pasiones. En sus tiempos libres, Wicor —como le decía su sobrino Andrés Mauricio— escribía poemas en su [página Escritos en noche azul](#), o conversaba sobre rock británico o el América de Cali y el Liverpool de Inglaterra. Y cuando no trabajaba o hacía veeduría social, Wilder pasaba tiempo con su familia.

Ellos le sugirieron que abandonara La Unión, pero Wilder no quiso. Decía que tenía un compromiso con el municipio, que su deber era contar la verdad. A pesar de eso, su mamá le insistió y le propuso hablar con las autoridades locales para que lo ayudaran y protegieran. “Más rápido me matan”, le contestó Wilder.

Hoy, dos meses después, el crimen sigue impune y la Fiscalía aún no comparte las hipótesis del caso. La Alcaldía sigue indiferente, ya que no ha estipulado medidas de seguridad para los colegas de Wilder ni ha presentado avances en la investigación. El alcalde Echavarría se comprometió a dar una rueda de prensa y a trabajar con Policía y Fiscalía para condenar a los responsables, pero la única acción pública fue el consejo extraordinario de seguridad que convocó el mismo día del asesinato.

En el municipio hay silencio porque nadie se atreve a continuar con las denuncias que hacía Wilder. En el canal pasa algo similar porque desde el crimen, no hay noticiero. La emisión más reciente fue publicada el 7 de diciembre del 2022 y fue la última nota que grabó junto a Jhonny. El único ruido que se oye en *Unión Televisión* es el de los carros o el televisor. Pero Jhonny aún escucha a su compañero. “Todavía siento que llega —dice con la voz entrecortada—. Que llega silbando”. ♦



Los intentos por acallar al periodismo

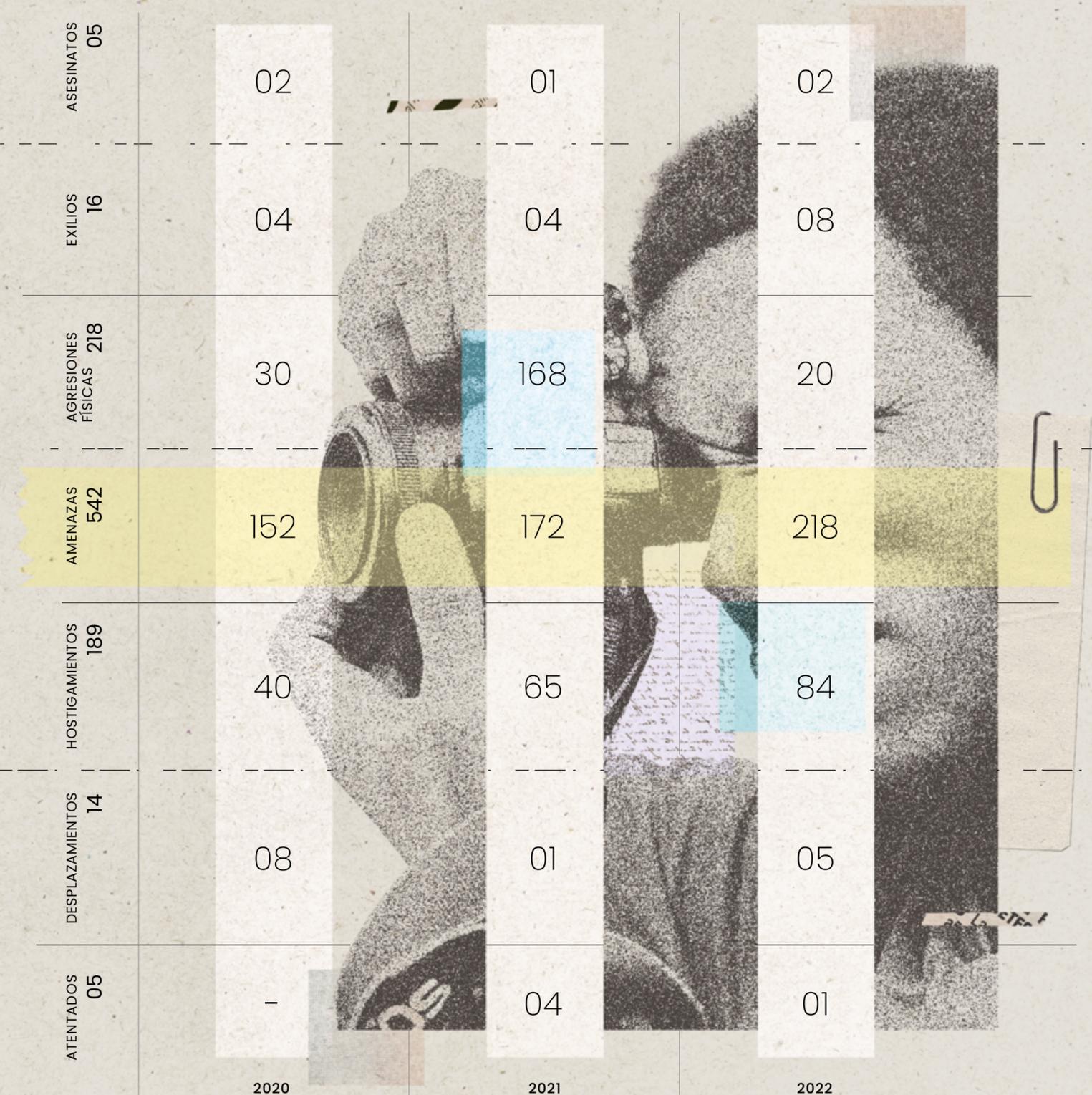
Desde el 2020 se ha incrementado la violencia contra la prensa: cinco periodistas han sido asesinados y se presentaron más de 540 amenazas.

¿Qué motiva el aumento de la violencia?
¿Cómo afecta a los y las periodistas?
¿Cuáles son las zonas más vulnerables?

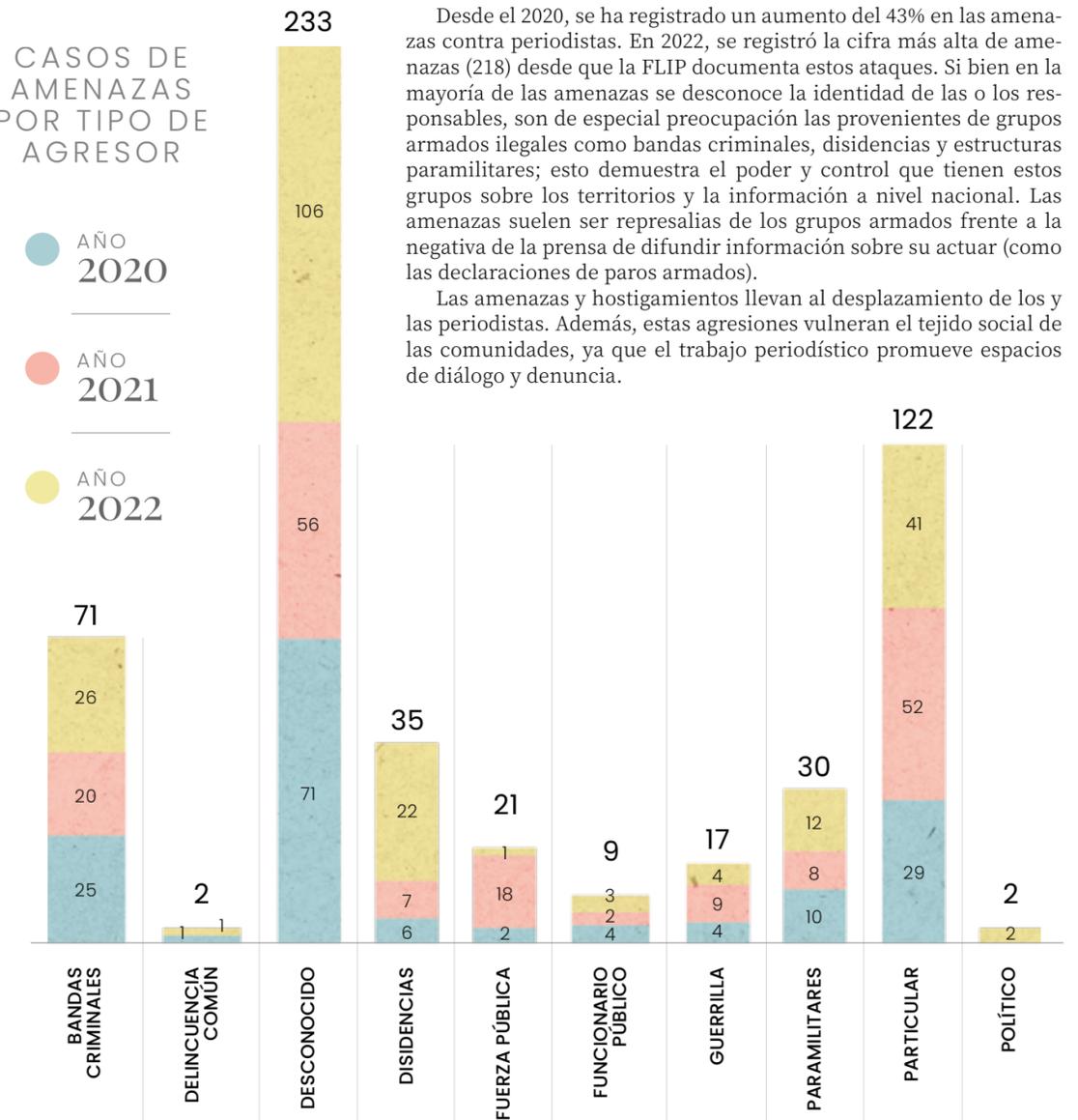
Incremento de la violencia contra la prensa:

LA TENDENCIA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CASOS DE AMENAZAS POR TIPO DE AGRESOR



Amenazas

DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Desde el 2020, se ha registrado un aumento del 43% en las amenazas contra periodistas. En 2022, se registró la cifra más alta de amenazas (218) desde que la FLIP documenta estos ataques. Si bien en la mayoría de las amenazas se desconoce la identidad de las o los responsables, son de especial preocupación las provenientes de grupos armados ilegales como bandas criminales, disidencias y estructuras paramilitares; esto demuestra el poder y control que tienen estos grupos sobre los territorios y la información a nivel nacional. Las amenazas suelen ser represalias de los grupos armados frente a la negativa de la prensa de difundir información sobre su actuar (como las declaraciones de paros armados).

Las amenazas y hostigamientos llevan al desplazamiento de los y las periodistas. Además, estas agresiones vulneran el tejido social de las comunidades, ya que el trabajo periodístico promueve espacios de diálogo y denuncia.

Las amenazas de las disidencias se han presentado en su mayoría en Arauca; las de las bandas criminales, en Antioquia y las de grupos paramilitares, en Bogotá. Aunque estas zonas tienen grandes diferencias entre ellas, comparten un contexto en el que hay una creciente presencia de grupos armados ilegales en disputa por el control del territorio. En medio de esto, quienes resultan más afectados son los y las periodistas que cubren temas relacionados con el accionar de estos grupos, la seguridad, la corrupción y la política.

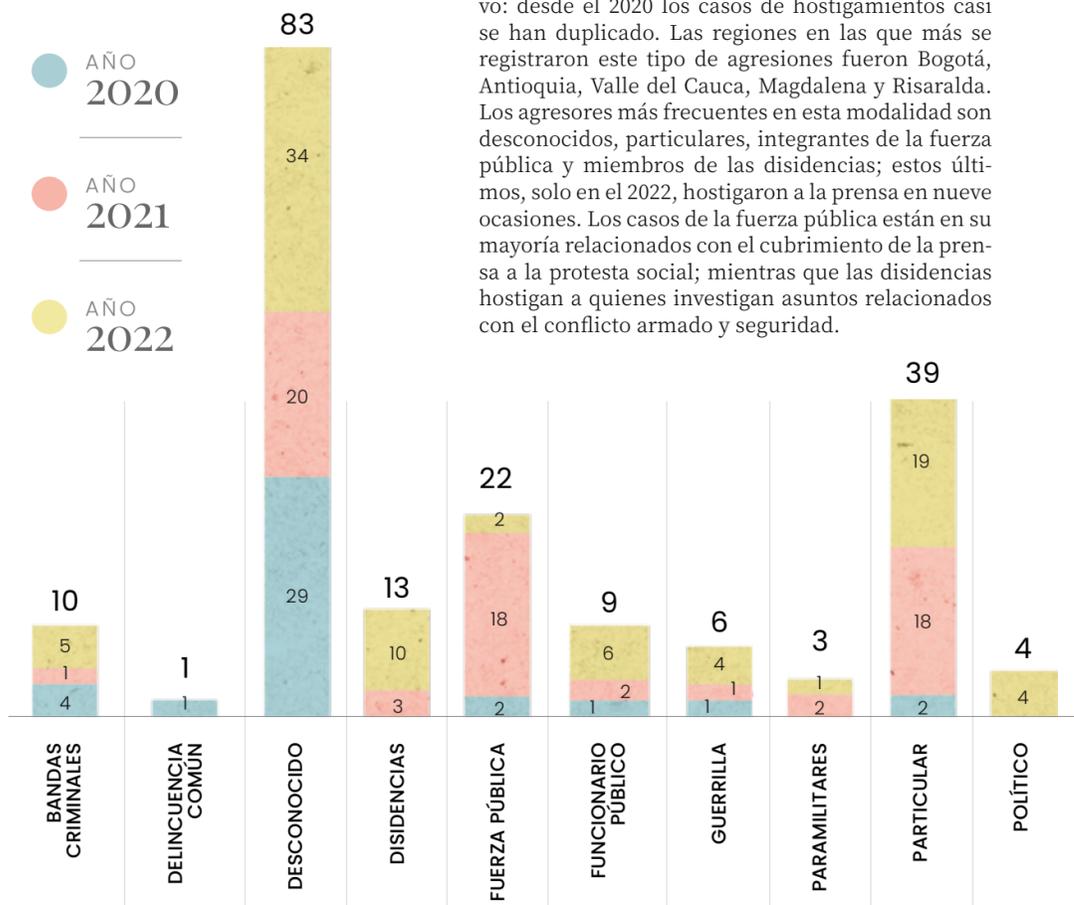


¿DÓNDE SE HAN CONCENTRADO LAS AMENAZAS DE ESTOS TRES ACTORES?

	BANDAS CRIMINALES	DISIDENCIAS	PARAMILITARES
2020	Antioquia: 7 Bogotá: 4 Córdoba: 4	Arauca: 2	Bogotá: 4 Córdoba: 2
2021	Santander: 5 Antioquia: 3	Risaralda: 2	Bogotá: 3
2022	Chocó: 6 Antioquia: 5	Arauca: 17	Bogotá: 5

Hostigamientos

POR TIPO DE AGRESOR



El hostigamiento es la tercera agresión que más ha sufrido la prensa en los últimos tres años, detrás de las amenazas y las agresiones físicas (que durante el paro nacional del 2021 alcanzaron niveles sin precedentes). Su incremento también es significativo: desde el 2020 los casos de hostigamientos casi se han duplicado. Las regiones en las que más se registraron este tipo de agresiones fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Risaralda. Los agresores más frecuentes en esta modalidad son desconocidos, particulares, integrantes de la fuerza pública y miembros de las disidencias; estos últimos, solo en el 2022, hostigaron a la prensa en nueve ocasiones. Los casos de la fuerza pública están en su mayoría relacionados con el cubrimiento de la prensa a la protesta social; mientras que las disidencias hostigan a quienes investigan asuntos relacionados con el conflicto armado y seguridad.



¿EN QUÉ REGIONES SE HAN CONCENTRADO ESTE TIPO DE AGRESIONES?

- 2020**
 Bogotá: 17
 Valle del Cauca: 5
 Magdalena: 3
- 2021**
 Bogotá: 11
 Antioquia: 7
 Valle del Cauca: 7
 Risaralda: 6
- 2022**
 Bogotá: 19
 Arauca: 15
 Antioquia: 11

Asesinato

En los últimos tres años fueron asesinados los periodistas Felipe Guevara, Abelardo Liz, Marcos Montalvo, Rafael Moreno y Wilder Córdoba, quienes trabajaban para y por las comunidades en las que residían. Cubrían temas relacionados con corrupción, seguridad, manifestaciones y los acontecimientos de sus barrios, municipios y ciudades. A Felipe y Marcos los asesinaron en Valle del Cauca; a Abelardo, en el Cauca; a Rafael, en Córdoba; y a Wilder, en Nariño. Los casos de Abelardo, Rafael y Wilder están en completa impunidad; y aunque en los casos de Felipe y de Marcos ha habido sanciones a algunos de los autores materiales, aún se desconoce quiénes fueron los determinadores y cuáles fueron las motivaciones de los crímenes.

	TIPO DE AGRESOR	
	DESCONOCIDO	FUERZA PÚBLICA
2020	1	1
¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN?	Judicial y seguridad	Manifestación social - minga
¿DÓNDE OCURRIERON?	Cali, Valle del Cauca	Corinto, Cauca
2021	1	
¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN?	Corrupción	
¿DÓNDE OCURRIERON?	Tuluá, Valle del Cauca	
2022	2	
¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN?	Corrupción y seguridad	
¿DÓNDE OCURRIERON?	Montelíbano, Córdoba, y La Unión, Nariño	

Desplazamientos

POR TIPO DE AGRESOR



Otra evidencia de la violencia contra la prensa es el desplazamiento forzado de periodistas. En los últimos tres años, la prensa se enfrentó a un sistema judicial ineficiente, que no atendía eficazmente las agresiones que denunciaban los y las periodistas. Debido a las pocas garantías de seguridad que tenían, desde el 2020, catorce periodistas (once hombres y tres mujeres) tuvieron que desplazarse de sus lugares de residencia para proteger su vida. Once de los desplazamientos se dieron luego de que los y las periodistas recibieran amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales. Al menos ocho de estos comunicadores no pudieron regresar a sus lugares de residencia por falta de garantías.



¿DE DÓNDE SE DESPLAZARON MÁS LOS Y LAS PERIODISTAS?

- 2020**
 Antioquia: 2
 Caquetá: 1
 Huila: 1
 Arauca: 1
 Córdoba: 1
 Atlántico: 1
 Magdalena: 1
- 2021**
 Magdalena: 1
- 2022**
 Arauca: 5

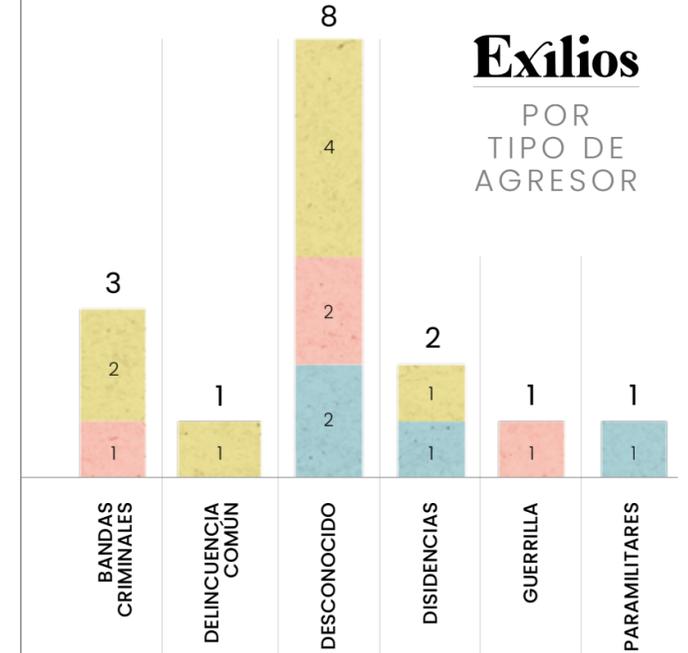
¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN LOS Y LAS PERIODISTAS QUE SE DESPLAZARON?

- Conflicto armado y orden público: 4
 Política: 2
 Corrupción: 2
 Cubría política
 Todos cubrían conflicto armado



Exilios

POR TIPO DE AGRESOR



Del 2020 al 2022, los exilios de periodistas se duplicaron: pasaron de cuatro a ocho. El exilio es la última opción para quienes están en riesgo, pues representa dificultades muy grandes en el ámbito económico, familiar, laboral y personal. Quienes han salido del país lo han hecho porque no han encontrado las garantías necesarias para seguir viviendo en Colombia y consideran que es más seguro empezar de cero en otro lugar. De los dieciséis periodistas que salieron del país en los últimos tres años, la FLIP conoce que cuatro de ellos denunciaron ante las autoridades y solicitaron la activación del mecanismo de protección sin recibir una respuesta favorable para su situación.



¿DE DÓNDE SE DESPLAZARON MÁS LOS Y LAS PERIODISTAS?

- 2020**
 Meta: 1
 Bogotá: 1
 Cundinamarca: 1
 Valle del Cauca: 1
- 2021**
 La Guajira: 1
 Santander: 1
 Valle del Cauca: 2
- 2022**
 Atlántico: 1
 Bogotá: 1
 Caquetá: 1
 Magdalena: 1
 Santander: 1
 Valle del Cauca: 2

¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN?

- Conflicto armado, narcotráfico, corrupción y política
 Política, orden público y seguridad
 Conflicto armado y seguridad, corrupción, judiciales, gestión de la administración pública y campañas electorales

2022: la violencia contra la prensa *no cambió*

Durante el 2022, presenciamos avances judiciales que protegían la libertad de prensa; sin embargo, el periodismo colombiano se enfrentó a la creciente violencia por parte de grupos armados y a un período electoral en el que líderes políticos estigmatizaron a medios y periodistas. Finalmente, en el último semestre del año presenciamos la muerte de dos comunicadores en Córdoba y Nariño. Este es un repaso de los hitos que marcaron a la libertad de prensa en el 2022.

1 / Pico de ataques contra la prensa de Arauca

A inicios del 2022, Arauca vivió un pico de violencia contra la prensa. Solo en la primera semana se registraron nueve hostigamientos a periodistas por parte de grupos armados ilegales en los municipios de Arauca y Saravena. Posteriormente, el 19 de enero, un carro bomba afectó [la infraestructura de dos medios de comunicación en Saravena](#). Además, durante todo el mes hubo un aumento en los hostigamientos realizados por personas que se identificaban como integrantes de las disidencias y de la guerrilla del ELN, quienes presionaron a periodistas para que publicaran información, como panfletos y amenazas. En todo el año, las disidencias fueron responsables de treinta ataques a la prensa en Arauca y cinco estuvieron a manos de miembros de la guerrilla.

Este incremento se suma a la tendencia de los últimos tres años: en el 2020 se registraron trece casos en Arauca; en el 2021, veinticuatro; y en el 2022, 54. Como consecuencia de esta violencia, cinco reporteros se vieron obligados a salir de manera forzosa del departamento, convirtiéndose así en la única región de todo el país que registró casos de desplazamiento forzado de periodistas durante el 2022.



FOTO ORIGINAL: Sarare Stereo

2 / Paro armado

Durante el paro armado decretado a inicios de mayo por el Clan del Golfo en seis departamentos, fueron amenazados y hostigados periodistas de doce medios. En el Bajo Cauca antioqueño, dos emisoras comunitarias fueron instigadas a difundir un panfleto del Clan del Golfo y, ante la falta de garantías de seguridad para los y las periodistas de esos medios, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado terminara. En Montería, Córdoba, amenazaron con incendiar una planta transmisora si esta no dejaba de funcionar. Esta sirve a seis estaciones de radio en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. [La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecieron sin señal por al menos cuatro días](#). A esto se sumó la amenaza que recibió otro periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. En Urabá, Antioquia, hombres armados dispararon al aire para obligar a que dos periodistas dejaran de grabar.



3 / Un periodo electoral violento

Entre enero y julio de 2022, la FLIP registró 55 ataques a la prensa relacionados con el cubrimiento de las elecciones presidenciales y legislativas. La agresión más frecuente fue la estigmatización, con diecinueve casos. Además, hubo once obstrucciones para hacer cubrimientos, especialmente durante las jornadas electorales y por parte de funcionarios públicos. La prensa también fue víctima de doce amenazas y de tres hostigamientos relacionados con el cubrimiento electoral. Los departamentos donde más ocurrieron estas agresiones fueron Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cauca y Magdalena.



4 / Estigmatizaciones contra la prensa como un fenómeno creciente y constante



La FLIP identificó que servidores y funcionarios públicos utilizaron la estigmatización como una forma de deslegitimar el trabajo de medios contrarios a sus intereses y posturas políticas, en algunas ocasiones con el interés de obtener aprobación por parte de sus seguidores. Durante el periodo electoral, las y los candidatos políticos sugirieron que la prensa mentía, asociaron a un sector de los medios con ideologías extremistas e impusieron cargas políticas que podían incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas.

De los 55 casos de estigmatización del 2022, 36 fueron realizados por funcionarios públicos, que en algunos casos constituyeron patrones de acoso, como en la alcaldía de Medellín, donde Daniel Quintero Calle y sus funcionarios más cercanos realizaron un persistente ataque contra *El Colombiano*. Además, del total de las estigmatizaciones, diez fueron realizadas por congresistas. Entre los reincidentes se destacan: María Fernanda Cabal, Piedad Córdoba y Roy Barreras.

5 / Amenazas a periodistas en el Darién



FOTO ORIGINAL: Mauricio Dueñas, EFE

El 6 de septiembre de 2022, [un equipo periodístico de Telemundo](#) fue víctima de amenazas mientras realizaba un cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, les amenazaron y exigieron que salieran del territorio. Incluso, les dijeron que varios periodistas ya habían muerto en el lugar. Cuando el periodista Daniel Muñoz estaba en Capurganá, Chocó, tres desconocidos le reiteraron que debía irse inmediatamente pues su vida corría peligro. Días después, ya fuera de la zona, Muñoz recibió una tercera amenaza por vía telefónica. Tres meses después, el periodista manifiesta que no ha recibido una atención oportuna en la activación de mecanismos de protección para su caso.

En zonas fronterizas se registraron otros dos casos de amenazas de muerte a la prensa por parte de grupos ilegales en [Chocó](#) y en [La Guajira](#). En los tres casos las amenazas han sido reiterativas y se han dado luego de que periodistas publicaran información sobre orden público y el accionar de los grupos armados ilegales. Además, en dos casos, los autores de las amenazas conocen la residencia y las rutinas de los periodistas afectados, lo que refleja un mayor riesgo y una mayor capacidad de ataque.

7 / Responsabilidad del Estado en caso de Edison Molina

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la [responsabilidad del Estado](#) en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. El tribunal consideró que el Estado fue pasivo frente a la situación de riesgo relacionado con las amenazas que había recibido y denunciado el comunicador.

El Tribunal ordenó la realización de una ceremonia pública en Puerto

Berrío, Antioquia, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.

6 / Asesinatos a periodistas locales: Rafael Moreno y Wilder Córdoba

El periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado en la noche del 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba. Dos hombres le dispararon cuando él estaba en un local de su propiedad. Moreno era el director del medio digital [Voces de Córdoba](#) y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social. Rafael recibía amenazas desde el 2019 y contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Hasta la fecha no hay un [avance significativo](#) en la investigación del crimen.

El periodista Wilder Córdoba fue asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, Nariño. Era director del canal de televisión comunitario [Unión Televisión](#), en donde trabajaba como periodista desde hace más de diez años y se le reconocía por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Hasta ahora [no hay ningún pronunciamiento](#) sobre cuáles son las hipótesis dentro de la investigación ni se conocen avances significativos.



Conozca más sobre quiénes eran **Rafael y Wilder** en las páginas 16 y 18, respectivamente.

8 / Una decisión judicial reconoció la existencia de la violencia en línea contra mujeres periodistas

El [Tribunal Administrativo de Cundinamarca](#) reconoció que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en redes sociales contra las mujeres periodistas. El Tribunal estableció que el Consejo Nacional Electoral y los comités de ética pueden sancionar a partidos, movimientos y líderes políticos por utilizar o permitir este tipo de violencia que afecta la participación ciudadana en asuntos públicos. El caso actualmente está en manos de la Corte Constitucional. Durante el 2022, la FLIP registró 44 agresiones en línea contra mujeres periodistas en diferentes plataformas digitales, principalmente en redes sociales.

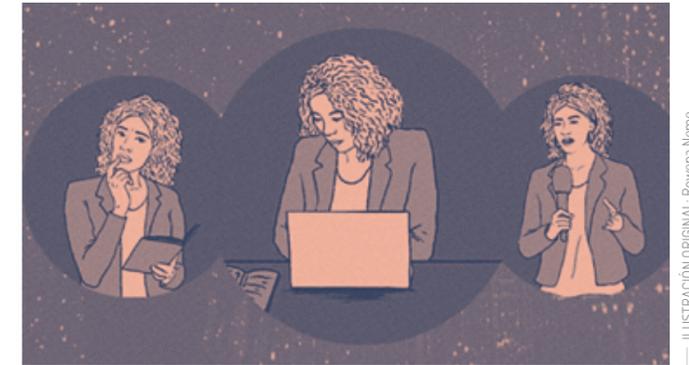


ILUSTRACIÓN ORIGINAL: Rowena Nieme

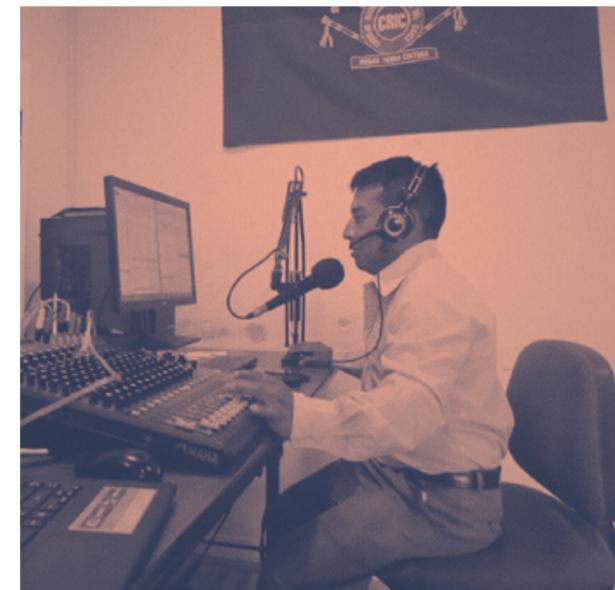


FOTO ORIGINAL: Tejido de comunicación ACIN

9 / Demanda al Estado por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz

En octubre del 2022, la [FLIP interpuso una demanda](#) de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista, ya que la FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad nasa en Corinto, Cauca.

10 / Acciones del Congreso sobre libertad de prensa

En el 2022, el Congreso avanzó en la defensa del derecho al acceso a la información. Después de casi dos años y por presión de distintos sectores, el entonces presidente Duque firmó la ley que restablecía los términos que tienen las entidades para responder a derechos de petición, que durante la pandemia habían sido ampliados. Además, se aprobó el Acuerdo

de Escazú, el cual trae más garantías para el acceso a la información sobre temas ambientales. Por otro lado, se inició el trámite para la creación de un fondo especial para la protección de la prensa en Colombia. Esto se dio como cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [Jineth Bedoya vs. Colombia](#). ♦



Después de la censura

¿Cómo continuar el camino del periodismo después de la pesada carga que deja la censura? ¿Qué acciones son necesarias por parte del Gobierno? ¿Qué actores deben comprometerse para luchar contra el silencio?

Puerto Libertador, 2022.
El 26 de octubre de 2022 se hizo una velación en Puerto Libertador, Córdoba, en honor a Rafael Moreno, el primer periodista asesinado ese año por razones de su oficio.



FOTO: Diego Cuevas

A los periodistas nos matan varias veces

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro *Narcoperiodismo* que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario *Q'hubo*.

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario *El País*, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a *El País* y al periodismo.

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en *Samaniego Estéreo*, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a

Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital

FOTO: Juan Pablo Madrid-Malo.



Universidad del Cauca, Popayán, Cauca. 2022.

En los últimos tres años, el asesinato de periodistas ha impactado a las comunidades de Corinto, Cauca; Cali y Tuluá, Valle del Cauca; Montelíbano, Córdoba; y La Unión, Nariño.

Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje *Mayo*, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora.

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron los teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez *Mayo* en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consiguen recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: *Mayo 1984* o *La mami Mayo*.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras. ♦



FOTO: Gabriel Linares

Cementerio del resguardo Mayabangloma, Fonseca, La Guajira. 2022.

Las emisoras que transmiten desde el resguardo wayuu de Mayabangloma, en Fonseca, La Guajira, comparten espacio con nuevos periodismos que brotan en anteriores desiertos informativos.

“La vigilancia es censura y es una forma de violencia contra la prensa”



FOTO: Archivo particular

Hablamos con el académico Silvio Waisbord sobre la violencia contra la prensa en Latinoamérica, la vigilancia por parte de Estados y plataformas, y algunas recomendaciones para disminuir los riesgos de ataques a periodistas. En su trabajo, Waisbord ha caracterizado a las y los periodistas y las amenazas contra su seguridad; para él, en la actualidad estos problemas se han empeorado y complejizado. Además, cree que Colombia y México son los países donde la violencia contra la prensa está más presente.

FLIP: ¿Por qué los y las periodistas de Latinoamérica son más vulnerables a los ataques o a la violencia?

Silvio Waisbord (S.W): Yo creo que las diferencias tienen que ver con varios aspectos. Una es lo que podemos llamar la situación legal en el sentido de la ausencia de un poder que proteja no solamente a periodistas sino a la ciudadanía en general. Esta situación es más aguda fuera de grandes ciudades donde realmente no hay protección, ya sea porque el Estado no protege o porque es cómplice de la violencia junto con otros actores. En el caso de América Latina, obviamente Colombia y México son emblemáticos justamente de esta situación.

Segundo, la impunidad, en el sentido de la facilidad del ataque ante la ausencia o debilidad de protección. No hay investigación ni castigo, y si hay impunidad contra aquellos que cometen diferentes tipos de ataques, lo cual legitima justamente el ataque.

Y esto es fundamental en casos de regiones o en provincias, donde tienen un perfil y un rol que no es puramente

de periodista sino de comunicador social: no es solamente alguien que informa o que da noticias, sino que tiene una posición en la comunidad más de movilización. Esto realza mucho más el perfil público del periodista, que tiene una posición activa en temas de conflicto, medio ambiente, salud comunitaria, y esto lo hace más vulnerable.

FLIP: ¿Qué patrones de agresiones a la prensa en Latinoamérica ha identificado? ¿Quiénes son más vulnerables?

S.W: En primer lugar, el periodismo que hace trabajo crítico y de investigación, el que involucra al poder. En segundo lugar, sectores que históricamente son vulnerables a diferentes discursos de odio y de agresión: mujeres y minorías étnicas, religiosas, sexuales. Estas personas son más vulnerables a los ataques en línea, pues ahora es mucho más fácil acceder a periodistas a través de Internet, también en la virtualidad hay una facilidad de organización y coordinación de ataques a determinados periodistas.

FLIP: En los años recientes, la FLIP, especialmente en contextos electorales, ha documentado una tendencia de parte de políticos y funcionarios de estigmatizar a la prensa. ¿Qué mecanismos pueden ser efectivos para frenar este fenómeno? ¿Existen ejemplos en otros países de la región o del norte global?

S.W: Cuando se habla de estigmatizaciones se hace referencia a una conducta que es difícil encontrarle una forma de prevención. El no estigmatizar es como una norma social. ¿Y qué pasa cuando la norma no existe o está quebrada? En el norte global, Estados Unidos y países europeos, se ha quebrado esa norma de no estigmatizar o de no tener palabras que eventualmente puedan legitimar ataques físicos. Y lo que estamos viendo es que no hay una solución para eso.

En América Latina sistemáticamente hay un discurso político que perpetúa diferentes tipos de estigmatización o de crítica sin ningún tipo de evidencia al periodismo. Los políticos lo hacen ya sea calculadamente para obtener rédito político o porque está ampliamente aceptado que no es un problema atacar, deslegitimar y deshumanizar a la prensa. Y en el contexto de hoy, cuando la prensa está vista como un bien político, eso le da cierto rédito para su propio público, para quienes piensan que realmente cierta prensa está empecinada en criticarlos.

FLIP: ¿Qué recomendaciones se le debería dar a los partidos, a los políticos, a los funcionarios, a los entes de control?

S.W: Una es levantar conciencia de que no son solo palabras, sino que tiene una consecuencia en términos de legitimar ciertos discursos y ciertas retóricas sobre la prensa. Y esto hoy en día se puede documentar. La otra es documentar sus consecuencias. Vale decir ¿qué pasa después de ciertos discursos que han tenido repercusión pública en la prensa? O, si hay un incremento de ataques digitales contra periodistas después de declaraciones de políticos en su contra.

FLIP: ¿Qué rol deberían tener las plataformas en las que se distribuyen los mensajes violentos o estigmatizantes?

S.W: Las plataformas obviamente tienen una responsabilidad social a la cual abdicar. Aquí hay varias cosas que hacer. Una es tener conversaciones con las plataformas mismas para documentar estos ataques que se realizan en línea y vincularlos con discursos políticos. Es necesario tenerlas como aliadas porque son el lugar donde esto ocurre y permitiría tener un mayor acceso a los datos, para documentar esto.

FLIP: Otra de las acciones que nos preocupan en Latinoamérica es la vigilancia a periodistas, muchas veces a través de softwares contratados por los Estados. ¿Cómo se puede abordar este problema?

S.W: El problema principal de la vigilancia es la total opacidad de las compañías sobre este tema. A pesar de las denuncias que ha habido en los últimos años, este tema no es todavía una prioridad. El uso de plataformas y los nuevos softwares para la vigilancia de

EN AMÉRICA LATINA SISTEMÁTICAMENTE HAY UN DISCURSO POLÍTICO QUE PERPETÚA DIFERENTES TIPOS DE ESTIGMATIZACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE EVIDENCIA AL PERIODISMO.

periodistas muestra la profunda debilidad de los actores que deberían hacer algo al respecto. El problema es que los periodistas son mucho más vulnerables a los ataques que usuarios regulares o comunes.

También hay que cambiar los términos del debate. Todas estas formas de violencia tienen que ser entendidas como violencia, si no es muy difícil avanzar. Seguimos pensando que la violencia es solamente la violencia física o la intimidación o ataques con bombas a redacciones. Entonces, vale decir “las formas cambiantes de la violencia contra la prensa”, en el sentido en que se han agregado otras formas de violencia: psicológica, digital, la seguridad, los SLAPP (pleito estratégico contra la participación pública, por sus siglas en inglés) y diferentes formas legales. Mientras no entendamos que esto es un paquete de acciones violentas contra la prensa, es muy difícil que diferentes actores entiendan que esto es un problema grave y que

necesita ser entendido como una forma de censura contra la prensa. La vigilancia es censura y es una forma de violencia contra la prensa.

FLIP: ¿Qué pueden hacer las y los periodistas y los medios de comunicación para minimizar los riesgos?

S.W: Hay acciones relativamente fáciles y acciones mucho más difíciles, entonces el tema es cómo se prioriza. Las acciones más fáciles son la capacitación mínima en seguridad digital que sirva concretamente para periodismo, y creo que eso ha sido una prioridad.

También hay que garantizar y facilitar la reportería de casos de acoso y de violencia. Del mismo modo hay que dejar de normalizar casos de agresiones. Quienes son más vulnerables no se molestan en reportar el acoso porque es cotidiano. Además, reportar casos de ataques lleva tiempo y no es fácil pues puede revivir traumas. Por eso es importante aportar apoyo psicológico y apoyo legal para quien lo necesite.

FLIP: Finalmente, ¿cuáles cree usted que son las tres tendencias riesgosas para la libertad de expresión en el 2023?

S.W: La primera es el tema de vigilancia, porque sabemos muy poco sobre esto. En segundo lugar, el rol de las redes sociales en el monitoreo y en los ataques coordinados. Por último está el tema legal, pues se siente que hay sofisticación legal para censurar. Yo creo que en la última década hemos agregado formas de control y de silenciamiento de la prensa más sutiles, especialmente en las democracias en la región. ♦

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas.

En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.



FOTO: Archivo particular

“Nuestra intención es trazar una política pública que garantice la labor de la prensa en Colombia”

FLIP: En los últimos tres años la violencia contra las y los periodistas se ha incrementado de manera sostenida. ¿Cuál es la reacción del Gobierno frente a este aumento de violencia contra la prensa?

Franklin Castañeda (F.C.): El Gobierno anunció un plan de emergencia que incluye unas medidas que parten de comprender que recibimos una institucionalidad un poco debilitada en materia de prevención de riesgos, de diálogo con la sociedad civil, de coordinación interinstitucional y de implementación de medidas de protección.

Desde el Gobierno tenemos una firme intención de promover una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión que

nos permita incorporar un enfoque de prevención de riesgos y de derechos humanos, y comprender, con enfoque diferencial, por qué tenemos en riesgo a periodistas comunitarios. Esa política debe tener varios ejes: protección a la vida, la libertad e integridad personal; el respeto a la libertad de opinión, de comunicar y de expresar; y la gestión preventiva de riesgos. Tenemos que trasladar esto a un enfoque preventivo, a uno que intenta ir antes de que los riesgos se hayan concretado. Luego está el tema de las garantías para el acceso a la información y a la justicia, porque notamos un reino de la impunidad en los atentados, amenazas, homicidios y desapariciones forzadas contra comunicadores.

FLIP: Antes del asesinato de Rafael Moreno, él y su colega, Organis Cuadrado, recibieron estigmatizaciones por parte de un funcionario público de Córdoba. ¿En qué va el plan de acción contra las estigmatizaciones?

F.C.: Acá tenemos un lío, porque el principal daño en estigmatización lo hace el director, el ‘vice’, el alcalde, el gobernador, y allí es donde necesitamos una Procuraduría y una Defensoría proclives a hacer llamados de atención. Ya instalamos la Mesa Nacional de Concertación del plan de la política contra la estigmatización y tenemos tres meses para avanzar en él. Confío en que podamos tener una política garante de derechos y disminuir alguna de las causas de la violencia en Colombia.

FLIP: Distintos sectores de la sociedad civil han criticado el funcionamiento y la implementación de medidas de protección de la UNP. ¿Cuál es la lectura desde el Ministerio del Interior frente a la capacidad de esta institución?

F.C.: Necesitamos mejorar la capacidad de reacción a riesgos anunciados y allí encontramos un panorama desolador, con una Unidad con un déficit de reacción y sin los suficientes recursos. Estamos organizando esa UNP para detectar y denunciar una serie de focos de corrupción que hay y, en un proceso de reforma, que disminuyan los plazos para dar respuesta,

que permitan la protección de quien realmente la necesita y que adecúen institucionalmente la Unidad para distintos riesgos. Una cosa es proteger en la ruralidad, otra en las ciudades.

Así, el brindar garantías de protección pasa de alguna forma por una acción integral del Estado, que supera el mandato constitucional y legal de la UNP. Pasa por la política de prevención, por el diálogo ciudadano y por la reconstrucción de confianza y la no estigmatización. También pasa por el rol de otros ministerios y por la transformación del contexto en el que se genera el riesgo.

FLIP: Más allá del funcionamiento de la UNP, ¿cuál cree que es el problema del mecanismo de protección?

F.C.: Encontramos un debilitamiento muy fuerte del conjunto de mecanismos que deben brindar garantías de seguridad a líderes, periodistas y oposición. Esos mecanismos los encontramos débiles por aspectos ligados a la corrupción, el diseño, los énfasis institucionales y porque están alejados de la ciudadanía. Se tomaron decisiones, a nuestro juicio, erradas, en la medida en que no fueron concertadas, por ejemplo, con a quienes se les brinda protección. Cuando monto un mecanismo para defender periodistas, pero el periodista siente que no es la herramienta adecuada o que le puede generar riesgos, como Estado tienes una oferta institucional que no está generando garantías sino temores.

También encontramos mecanismos de protección que funcionan por demanda y no por oferta. Si tengo un

mecanismo que se encarga de brindar esa protección, si tengo la obligación constitucional, debo promover el uso de medios, facilitar las vías y acercar a los ciudadanos que lo requieren. Tenemos los medios para saber quiénes están bajo riesgo, como las alertas tempranas de la Defensoría.

Entonces es grave que conociendo la situación de riesgo, no tengas una institucionalidad proclive a ofrecer y garantizar el servicio sino que tengas una entidad que espere a que el ciudadano pelee por el acceso al servicio, que los jueces ordenen el acceso al servicio. Necesitamos transformar eso y ponerlo en su justa proporción. ♦

SE HA HECHO UN ACTO DE RECHAZO A LA VIOLENCIA CONTRA LÍDERES Y PERIODISTAS Y UN RECONOCIMIENTO DE SU LABOR.

Profesión: periodista (peligro)



Por Laura Bonilla, Gerente para América Latina de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). FOTO: Cortesía Laura Bonilla.

quienes han revelado la verdad de la macabra noche de Iguala. Casos, muchísimos.

Creo, personalmente, que es una trampa pensar esta situación como una colección de casos aislados. El asesinato de periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones de víctimas y ambientalistas tiene como correlato el ejercicio violento del poder, cada vez más organizado, regional y sofisticado, y como principal víctima las instituciones democráticas. No es gratuito que justamente los gobiernos más autoritarios de la región traten de omitir el debate sobre la violencia organizada, al mismo tiempo que hacen todo lo posible por silenciar las voces críticas y producir vacíos de información.

Ahora, hay algo que incrementa este riesgo compartido: la difusión y consumo masivo de noticias falsas que intentan vender al periodismo como aliado del poder, mientras las cadenas de mensajería dicen la verdad. Es cierto que las redes sociales nos han puesto grandes retos, pero nada más alejado de la verdad. Por el contrario, es a través de esas falsedades sin rostro que perdemos la comprensión de la realidad y por esa vía somos capaces de elegir cualquier cosa, incluso al autoritarismo por encima de la democracia o a la guerra por encima de la paz. En últimas, nos están haciendo pensar que no necesitamos al periodismo, cuando lo requerimos más que nunca.

Cuente cuántos países lograron estabilizar sus democracias y tener equidad social restringiendo la libertad de prensa. Ahora, cuente cuántos países han logrado mantener altos índices de estabilidad y calidad de vida asesinando sus liderazgos. Los colegas que han sido asesinados estaban contando una historia, probablemente develando ese entramado de corrupción que hace que usted nunca logre tener una oportunidad de empleo, o que su recibo de la luz en Cartagena sea impagable.

Así que, mi mensaje es muy simple: no hay democracia sin periodistas, y la democracia en la región está en riesgo. El periodismo es la reserva ética de la sociedad. Muchas veces la única que tenemos. ❖

Si hoy una persona joven en América Latina decidiera escoger la profesión más riesgosa para su vida, elegiría ser periodista. Ese autoritarismo nuestro, tan velado y escondido es responsable del 50% de los homicidios de periodistas en el mundo. De 67 colegas asesinados —según el informe del Comité de Protección de Periodistas— la mitad ocurren en la región. Al mismo tiempo, gobiernos de distintas orientaciones ideológicas se empeñan en hacer campañas para mantener la idea de que nuestra violencia es un asunto marginal, de delincuentes, para negar que esta violencia sigue estando enraizada en la alianza entre política, crimen, corrupción y mafia. Matamos más periodistas que en la guerra en Ucrania.

Lo curioso es que todas las profesiones de alto riesgo hoy son las que se encargan de sostener la democracia, aún en las peores condiciones. Los líderes sociales en Colombia, especialmente los ambientalistas y las personas defensoras de derechos humanos son las principales víctimas de la violencia selectiva. En Nicaragua, sin importar su filiación, organizaciones sociales, periodistas y defensoras del ambiente se han dedicado a intentar develar los entresijos de la élite corrupta en el poder; al igual que lo ha hecho la sociedad civil en Guatemala donde el costo de denunciar la corrupción está siendo el exilio; y en El Salvador, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. En México fueron las víctimas apoyadas en el periodismo de investigación



Piedad Córdoba @piedadcordoba
Respecto al columnioso informe publicado hoy en @NoticiasCaracol exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política.

Roy Barrena @RoyBarrena
Respecto como siempre la libertad de información pero este titular es de mala fe porque fabrica una FakeNews publicando una FOTO donde NO están los que menciona pero como la gente -Incluyéndonos- no los ha visto en la vida, da la impresión de que estuvieron en reunión con nosotros

Jorge Ivan Ospina @JorgeIvanOspina
Por qué le será tan sencillo al periódico @elpaiscall mentir ? No se dará cuenta de su función social ?
12:21 p. m. · 6 dic. 2022

Gustavo Bolívar @GustavoBolar
#Hilo
La sicaria moral @darcyquinnr a quien tengo denunciada en @FiscaliaCol por calumnia, esta difundiendo q soy culpable de lo q pasó en gdot. para construir el relato de que soy tóxico para la campaña.

MIGUEL POLO POLO @MiguelPolop
Lo de W Radio contra mi persona no es periodismo, es una clara persecución política. Ya han sacado dos noticias falsas en esta semana. Actuaré legalmente
JAMÁS HE SIDO BECARIO NI HE RECIBIDO AYUDAS EDUCATIVAS COMO INDÍGENA.

Enrique Gómez @EnriqueGomez1
Hay una actitud hipócrita varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país. El contexto con el que presentan la noticia es claramente parcializado y el ministro Molano debe mantenerse y presentar sus expedientes.

Ing Rodolfo Hernandez @ingrodolfoh
Están tan desesperados que ya se unieron Uribe, y Petro para atacarme, usando a cuanto corrupto venta anda suelto.

Gustavo Petro @petrogustavo
Representante gubernamental de Colombia
nazis en RCN.
Noticias RCN | @NoticiasRCN · 28 mar. 2022
En varias ocasiones Petro, el candidato por 12 años a la presidencia, ha soltado amenazas contra la 'propiedad privada'. @RightMedia.com/legion/petro...

María Fernanda Cabel @MariaFdaCabel
#EIDato Hay cinco emisoras de radio, controladas por exmiembros de las FARC

Profa Farley @ProfaFarley
A continuación les dejo la forma ruin en que Vanguardia defiende a los victimarios y corruptos de PASAPORTES, mientras sataniza a quien tuvo el valor de enfrentarlos con pruebas y argumentos. Véanlo ustedes mismos ¿Le respondemos entre todos como se merece?

lina maria peña peña @linamaria
Rafael Martínez, según informe de @FLIP_org es el mayor acosador de la prensa en la historia de Colombia, desestimó las amenazas de muerte que tuvimos con @PoloDiazG y @victorpolo y hoy expone a la prensa! Para @AIPICOL @FLIP_org pronunciamiento! @goodluck_Bock @GustavoRugeles

Gabriel Linares, 2023

ESTO TAMBIÉN ES VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA
Figuras públicas y autoridades insultan a la prensa de forma calculada con el único propósito de deslegitimar, deshumanizar y censurar a las y los periodistas.

CONSONANTE

Información. Comunidad. Poder.

Somos un medio de comunicación que te explica noticias locales.



Síguenos en
redes sociales
@consonante_lab